



JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Medellín, dos de abril de dos mil veinticuatro

Interlocutorio	1024
ceso	OBJECIONES EN EL TRAMITE DE NEGOCIACIÓN DE LAS DEUDAS DE UNA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
Deudor	PAOLA VANESSA SANMARTIN GALEANO
Acreedores	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN AGAVAL BANCO DE BOGOTÁ BANCO FINANDINA BANCO POPULAR FEPEP FINANCIERA TUA MARIA ESTELLA PALACIO GALVIS MUEBLES JAMAR UN COLOMBIA PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA YANET LILIANA CARCAMO LONDOÑO
Radicado	05001 40 03 001 2024 00579 00
Asunto	DECIDE OBJECIONES, DECLARA NO PROBADAS

Procede el Juzgado a resolver las objeciones propuestas por las apoderadas de los acreedores BANCO DE BOGOTÁ y BANCO POPULAR, dentro de la negociación de las deudas de la persona natural no comerciante PAOLA VANESSA SANMARTIN GALEANO.

ANTECEDENTES

La señora PAOLA VANESSA SANMARTIN GALEANO en su calidad de persona natural no comerciante y como deudora morosa del banco de Bogotá, entre otros, solicitó ante el CENTRO DE CONCILIACIÓN en derecho “CONALBOS” el inicio del trámite de negociación de sus deudas.

Dentro de la relación de sus bienes reseñó un inmueble, apartamento, identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-1279547 situado en la Carrera 44-45-53, apartamento 301 del Municipio de Itagüí, avaluado en la suma de

\$220.000.000.00

DEL TRÁMITE

El trámite de negociación fue admitido el 06 de diciembre de 2023 fijándose fecha de audiencia para el día 26 de enero de 2024, audiencia ésta en la que se propusieron las siguientes objeciones:

La abogada DIANA CECILIA LONDOÑO PATIÑO, **en representación del acreedor BANCO DE BOGOTÁ**, objetó LA OBLIGACION respecto de la acreencia del acreedor PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA, por no prestar mérito ejecutivo, pues que la letra de cambio que se presenta como respaldo de la obligación, a la luz del Art. 621 C.cio., no contiene la firma del creador, el señor ACEVEDO MENDOZA, ni ha sido sustituido por signo o contraseña, por lo que este no dio la orden de pago allí consignada, por lo que no se está frente a un título valor, letra de cambio. Como sustento de la objeción transcribe apartes de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la firma del creador de la letra de cambio.

La abogada BEATRIZ ELENA BEDOYA ORREGO **en representación del acreedor BANCO POPULAR**, objetó LAS OBLIGACIONES respecto de las acreencias de los acreedores PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA, MARIA ESTELLA PALACIO GALVIS y YANETH LILIANA CARCAMO LONDOÑO por no prestar mérito ejecutivo.

En el escrito de sustentación argumenta que no existe evidencia de trazabilidad, esto es, que según la deudora y estos acreedores, los préstamos lo fueron en efectivo sin saberse si en un momento o en varios, y que la deudora continua con su empleo en EPM como cuando adquirió los créditos, por lo que no ha perdido capacidad de ingreso, lo que se incrementa cada años. Y que además, según la audiencia de negociación de deudas, el acreedor PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA es el padre del hijo de la deudora y que ello se convierte en indicio, pues que con dicho crédito que sólo requiere la firma de un título por esta, puede llegar fácilmente a un acuerdo y si el trámite pasa a liquidación, lograría liberarse de las obligaciones financieras y en especial de los descuentos de libranza. Que no hay evidencia de traslado de dinero, ni de donde provino el mismo, ni reporte a la Dian, ni la destinación y que la deudora ha conservado sus ingresos en los últimos años, y que se desconoce ocupación de los deudores que les permita prestar esas sumas, que en la audiencia solo expusieron el mandamiento de pago sin compartir más información, **solicitando que el Despacho indague alguna evidencia de la existencia del crédito**, según el Art. 169 C.G.P., pues que los demás acreedores no tienen acceso a la información.

Que si bien se presume la buena fe del crédito y de la deudora, lo expuesto controvertiría la misma, en favor de los demás acreedores que sí reportan las obligaciones y disponen de toda la información clara frente al crédito, y que por tanto debe aclararse la existencia del crédito que al parecer solo busca beneficiar a la deudora y en cambio la deudora se beneficiaría de tales obligaciones para no pagar las demás. Que el Despacho puede solicitar prueba de oficio, pidiendo a la DIAN si las tales obligaciones fueron reportadas, como debió serlo por disposición legal, además para evitar conductas contrarias a la figura de la insolvencia.

Concluye que se objetan dichos créditos por existir dudas en cuanto a su existencia, naturaleza y cuantía del mismo, y en cuanto de donde provienen las mismas, pues que no se indica el negocio jurídico que subyace al vínculo contractual y la exhibición del título valor que adolece de requisitos de la validez del título; y que debe ser el titular del crédito objetado el que debe desvirtuar lo

planteado, para dejar en claro la legitimidad de la obligación, conforme al concepto de carga dinámica de la prueba.

Solicita al despacho la practica de las pruebas necesarias para demostrar la certeza de los créditos, así como declarar fundadas las objeciones planteadas, ordenando su exclusión del trámite de insolvencia.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS OBJECIONES:

El Acreedor PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA al descorrer el traslado de las objeciones propuestas por Banco de Bogotá, señaló que la ley de insolvencia no exige evidencia de la trazabilidad de los desembolsos, por lo que no le es dable a otro acreedor exigirla, aclara que el monto de tal crédito no fue recibido de contado, sino ruto de una serie de préstamos. Que si bien es el padre del hijo de la deudora, sociedad conyugal que ya terminó, siguen sosteniendo una amistad y ayuda mutua y que a sabiendas de las dificultades que tenía, le hizo unos préstamos. Respecto a la no validez del titulo para fungir como titulo valor, cita los Arts. 621 y 676 Ccio. para concluir que el titulo letra de cambio aportada como sustento de su acreencia cumple con los requisitos normativos referidos.

Respecto a la objeción del Banco Popular, en cuanto a que en la audiencia no se compartió información respecto a la procedencia de los ingresos, advierte que ningún acreedor allí solicitó tal información, y que con antelación sí había enviado a la conciliadora la letra de cambio contentiva de su acreencia, para conocimiento de los demás acreedores. Y en lo demás hace apuntes idénticos a los referidos en párrafo anterior. Hace referencia a las condiciones de literalidad e incorporación del titulo valor, igual refiere argumento jurisprudencial de la corte Suprema de Justicia, respecto a la legitimación por parte del tenedor del titulo. Hace por demás referencia a algunas normas que rigen el proceso de negociación de deudas de persona natural no comerciante, para reiterar que allí no se exigen los supuestos que en la objeción se exponen como requisitos para que sea reconocida una obligación.

Solicita declarar no probadas las objeciones propuestas.

La deudora al descorrer el traslado de las objeciones advierte que respecto al título valor que se presenta como respaldo de una de las obligaciones, del mismo sólo se exige que cumpla con los requisitos de validez y de contener una obligación clara, expresa y exigible, nunca la demostración del negocio subyacente. Que los títulos aportados cumplen tales requisitos y que al igual en la solicitud se cumple con el requisito de ley cual es relacionar allí los acreedores y sus obligaciones, lo cual se hace bajo la gravedad del juramento y que ello es suficiente para probar la existencia de las acreencias. Que los objetantes no aportaron prueba que desvirtuara la información suministrada sobre la existencia de las acreencias. En lo demás presenta idénticos argumentos a los alegados por el acreedor ACEVEDO MENDOZA. Solicita declarar infundadas las objeciones presentadas.

CONSIDERACIONES:

Competencia

El numeral 1 del artículo 550 del Código General del Proceso prevé las objeciones como un mecanismo para controvertir la información suministrada por el deudor con relación a las acreencias.

Así entonces, en virtud de lo previsto en los artículos 534 y 552 del Código General del Proceso, este Juzgado es competente para conocer de la objeción presentada.

Problema jurídico

Conforme a la situación fáctica planteada, debe este Despacho establecer la legitimación de las objeciones presentadas contra los créditos de los acreedores PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA, MARIA ESTELLA PALACIO GALVIS y YANETH LILIANA CARCAMO LONDOÑO para reparar la existencia del título, la trazabilidad de las sumas entregadas en mutuo a la deudora, la naturaleza y negocio causal de los créditos, y con ello si la mismas son o no procedentes y por lo tanto están o no llamadas a prosperar.

PREMISAS JURIDICAS

El artículo 552 del Código General del Proceso dispone que: *“Si no se concilian las objeciones en la audiencia, el conciliador la suspenderá por diez (10) días, para que dentro de los cinco (5) primeros días inmediatamente siguientes a la suspensión, los objetantes presenten ante él y por escrito la objeción, junto con las pruebas que pretendan hacer valer. Vencido este término, correrá uno igual para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre la objeción formulada y aporten las pruebas a que hubiere lugar. **Los escritos presentados serán remitidos de manera inmediata por el conciliador al juez, quien resolverá de plano sobre las objeciones planteadas, mediante auto que no admite recursos, y ordenará la devolución de las diligencias al conciliador**”.* (Negrita y subrayado fuera de texto)

El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante es un conjunto de herramientas que el Código General del Proceso dispone para atender la crisis del deudor persona natural no comerciante y permitir su reincorporación al mercado.

En tal sentido, no pueden acceder a los procedimientos de insolvencia previstos en el Código General del Proceso las personas jurídicas, las personas naturales que se dediquen profesionalmente al comercio, ni las naturales que tengan control sobre una sociedad o empresa que está en crisis.

Respecto de los conceptos que pueden incluirse dentro del trámite de negociación de deudas y las sumas que por tales conceptos debe liquidarse, tenemos las siguientes normas:

ARTÍCULO 538. SUPUESTOS DE INSOLVENCIA. Para los fines previstos en este título, se entenderá que la persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos.

Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

ARTÍCULO 539. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE DEUDAS.

(...)2. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores, en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, indicando nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses, y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo. (subrayas adrede)

CASO CONCRETO

Procede el Juzgado a resolver la objeciones presentadas dentro del trámite de negociación de las deudas de la señora PAULA VANESA SANMARTIN GALEANO, quien como persona natural no comerciante que ha incurrido en mora respecto de sus obligaciones financieras y sin solvencia alguna para cubrirlas a cabalidad, inició trámite de negociación de sus deudas ante el CENTRO DE CONCILIACIÓN en derecho “CONALBOS”, mismo dentro del cual se presentaron las objeciones, a las que pasa a referirse el Despacho de conformidad con lo previsto en el artículo 552 del Código General del Proceso, en aras a resolver las mismas.

Como se dijo, los apoderados de los acreedores BANCO DE BOGOTÁ y BANCO POPULAR objetaron las acreencias que tiene la deudora con las personas naturales PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA, MARIA ESTELLA PALACIO GALVIS y YANETH LILIANA CARCAMO LONDOÑO.

Así entonces, para decidir el asunto se hará referencia a lo relacionado con el principio de buena fe que se encuentra consagrado en el artículo 83 de la Constitución Nacional, y sobre la cual la Corte Constitucional ha indicado:

“(…) el principio de la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. Por ello ha sido concebido como una exigencia de honestidad, rectitud y credibilidad a la cual se encuentra sometido el actuar de las autoridades públicas y de los particulares, bajo una doble connotación, ya sea a través de las actuaciones que surgen entre la Administración y los particulares, o de estos últimos entre sí.” (T-527/2013)

“En virtud de ello, la Corte ha señalado que la buena fe ha pasado de ser un principio general del derecho para convertirse en un postulado constitucional. Este trascendental principio exige de los particulares y de las autoridades ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta (vir bonus). La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. En similar sentido, en la Sentencia T-1117 de 2003 se dijo que “según lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, si bien el Estado no puede defraudar a los administrados en la confianza que ellos depositan en él y en el valor mismo de sus actuaciones, el particular igualmente debe actuar de manera tal que su buena fe y transparencia se vean reflejadas en las actuaciones que cumpla frente a las diferentes entidades del Estado.” (T-999 de 2012)

Bajo el paradigma enunciado el deudor no debe arrimar al trámite de insolvencia soporte probatorio de las afirmaciones contenidas en su solicitud de negociación de deudas, máxime teniendo en cuenta que los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante se edifican sobre la base de la buena fe del solicitante. Pese a lo anterior, dicho principio no tiene un carácter absoluto, por lo cual, cuando se presentan dudas frente a la existencia de la obligación, corresponde tanto al deudor como a los acreedores cuya obligación está siendo objeto de reparo aportar la información y soportes conducentes para demostrar sus obligaciones.

Al respecto, se evidencia del material probatorio aportado y de las alegaciones mismas de los objetantes que no se discute la ausencia de los documentos soporte de las obligaciones objetadas, o sea, ello no está en discusión, pues no es la falta de los títulos soportes de las obligaciones lo que apoya el descontento de las objeciones, sino en cuanto al primer objetante, la inexistencia del título de la obligación de PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA, pues que el aportado adolece de los requisitos de validez a la luz del art. 621 Ccio., al adolecer de la firma del creador, y en cuanto al segundo objetante, la falta de demostración y/o dudas respecto a la existencia, naturaleza y cuantía de los créditos, de donde provienen los mismos, pues que no se indica el negocio jurídico que subyace al vínculo contractual.

Así entonces, en lo que concierne a los requisitos para la confección de los títulos valores (letra de cambio) tenemos: En materia de títulos valores el artículo 621 del Código de Comercio establece los requisitos generales para la existencia de tales documentos, indicando que algunos de ellos pueden ser suplidos o presumidos ante la omisión en su estipulación por las partes (en concordancia con el numeral 4 del artículo 784 del Código de Comercio); al igual que el artículo 671 del mismo Estatuto donde se encuentran reglados los requisitos específicos para la existencia de la letra de cambio:

ARTÍCULO 621. REQUISITOS PARA LOS TÍTULOS VALORES. Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar los requisitos siguientes:

- 1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y
- 2) La firma de quién lo crea.

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas.

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega.

ARTÍCULO 671. <CONTENIDO DE LA LETRA DE CAMBIO>. Además de lo dispuesto en el artículo 621, la letra de cambio deberá contener:

- 1) La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero;
- 2) El nombre del girado;
- 3) La forma del vencimiento, y
- 4) La indicación de ser pagadera a la orden o al portador.

Así entonces, en lo que atañe a la validez de los títulos valores contentivos de las obligaciones objetadas, en lo referente a su confección, lo que en este punto alega el inconforme es que la letra del crédito del primer acreedor objetado no contiene la firma del creador, pues que solo se consignó la aceptación de la deudora tras su firma y que entonces dicha letra carece de requisitos de validez a la luz del Art. 621 Ccio.

Pero se observa que el Art. 676 Ccio. resuelve el enigma que propone el objetante banco de Bogotá, al consagrar:

“ARTÍCULO 676. LETRAS DE CAMBIO GIRADA A LA ORDEN DEL MISMO GIRADOR. La letra de cambio puede girarse a la orden o a cargo del mismo girador. En este último caso, el girador quedará obligado como aceptante; y si la letra fuere girada a cierto tiempo vista, su presentación sólo tendrá el efecto de fijar la fecha de su vencimiento”

Y el contenido de la norma ha sido objeto de pronunciamiento por el Órgano de cierre de la Justicia Ordinaria, al desarrollar el tema en los siguientes términos:

“(…)De allí se destaca que el instrumento exterioriza una declaración unilateral de voluntad proveniente de una persona a quien se le conoce como girador, creador o librador, quien por medio de ese documento, imparte una orden escrita a otra, que vendría a ser el girado o librado, de pagar una determinada cantidad de dinero en un tiempo futuro a quien ostente la calidad de beneficiario del instrumento si es persona determinada, o al portador.

Nada se opone a que, en un momento dado, en una de tales personas, puedan converger dos de las indicadas calidades, tal cual lo autoriza el artículo 676 del Código de Comercio al prever que “la letra de cambio puede girarse a la orden o a cargo del mismo girador”, a lo que “en este último caso, el girador quedará obligado como aceptante” (negrilla para enfatizar).

Lo precedente significa que en todos los casos en que la letra de cambio carezca de la firma del acreedor como creador, no es jurídicamente admisible considerar inexistente o afectado de ineficacia el título-valor, cuando el deudor ha suscrito el instrumento únicamente como aceptante, porque de conformidad con el precepto antes citado, debe suponerse que hizo las veces de girador, y en ese orden, la imposición de su firma le adscribe dos calidades: la de aceptante - girado y la de girador - creador»ⁱ

Lo anterior zanja cualquier discusión frente a la validez del título valor, letra de cambio, aportado como soporte de la obligación a favor del acreedor objetado PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA, pues que la misma objetante admite que la letra sí aparece aceptada con la firma de la deudora, y no hay duda que con dicha firma aquella funge en el título como girador y girada, condición que con la sola firma que se admite contiene el título, se acreditan, pues que así lo consagra la norma que se acaba de transcribir, al igual que lo precisa la jurisprudencia citada, con lo que desde ya se advierte que la objeción propuesta en este sentido por el acreedor Banco de Bogotá está llamada al fracaso, pues de lo dicho se concluye que el requisito echado de menos por la entidad objetante en el título cuestionado, sí se encuentra acreditado.

En cuanto a los cargos enrostrados por el acreedor Banco Popular frente a las acreencias de los señores PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA, MARIA ESTELLA PALACIO GALVIS y YANETH LILIANA CARCAMO LONDOÑO, se observa que en la solicitud de negociación de deudas la solicitante relacionó las obligaciones de estos tres acreedores dentro de la relación de deudas y acreedores, y en principio hay que admitir que la presentación de los títulos contentivos de tales obligaciones no es el objeto de los reproches, luego con independencia que se hayan aportado o no tales títulos, lo mismo no se ha reclamado y que además ello no es una exigencia conforme lo reglado en el artículo 539 del C.G.P..

Ahora, el descontento del acreedor Banco Popular se centra directamente en la existencia del negocio causal que origino la emisión de aquellos títulos valores, presumiendo lo misma como inexistente. Sobre ello, en primer lugar, habrá de dejarse sentado que de conformidad con las características literalidad y autonomía de las que gozan los títulos valores (artículo 619 del Código de Comercio) el negocio causal se desliga de la obligación cartular contenida en las letras de cambio o títulos objeto de discusión.

Adicionalmente es claro que, el debate sobre la inexistencia de negocio causal es expuesto en el escenario de la negociación de las deudas de una persona natural no comerciante, mismo que es adelantado por un conciliador sin facultades para declarar judicialmente la carencia de relación fundamental o subyacente de los dichos títulos valores, y derivar de tal decisión las consecuencias jurídicas pertinentes. Tampoco es dable para esta judicatura realizar el análisis, debate probatorio y declaración respecto de la inexistencia del negocio causal en comento, pues para ello se requiere del adelantamiento de un tramite declarativo, en el que se garanticen derechos procesales como el debido proceso, la defensa y contradicción de cada uno de los participantes e interesados y se dé cumplimiento a cada una de las etapas procesales.

Así entonces, si lo que pretende la objetante es la declaratoria de inexistencia de la relación originaria de dichos títulos valores, debe hacer el adecuado uso de las instancias y recursos o acciones procesales, de manera que, esta objeción No está llamada a prosperar, pues las exigencias que hace el inconforme con estas acreencias no engranan dentro de los requisitos legales que exige la normativa que regula el tema de los títulos valores, su otorgamiento y/o confección, su ley de circulación y demás, y menos aún dentro de los requisitos propios de la negociación de deudas de persona natural no comerciante.

Por consiguiente, es concluyente para este Despacho de acuerdo con las premisas jurídicas, pronunciamientos jurisprudenciales, análisis y motivación ya indicadas, establecer que, conforme a los argumentos de los objetantes, no existen razones para no incluir dentro del trámite de negociación de las deudas de la aquí deudora las obligaciones contenidas en los títulos otorgados en favor de sus acreedoras PABLO ANDRES ACEVEDO MENDOZA, MARIA ESTELLA PALACIO GALVIS y YANETH LILIANA CARCAMO LONDOÑO.

En cuanto a la probanza solicitada por el objetante Banco Popular, téngase en cuenta que “resolver de plano”, en el argot jurídico significa que se debe de resolver en la misma pieza de autos sin mayor sustanciación, de inmediato e integralmente. También significa resolver sin formulismos y tramitación especial alguna”; y en ese sentido manda el legislador resolver en la clase de asunto que nos atañe: Art. 552 C.G.P.: “(...)Los escritos presentados serán remitidos de manera inmediata por el conciliador al juez, **quien resolverá de plano** sobre las objeciones planteadas, mediante auto que no admite recursos, y ordenará la devolución de las diligencias al conciliador(...), luego, no está contemplada legalmente la posibilidad de solicitud y práctica de pruebas ante el Juez que resolverá la objeción, más allá del análisis de lo obrante en el proceso que le es remitido, por lo que con la solicitud probatoria elevada por este objetante, se falta por lo menos a la técnica procesal para el asunto de marras, pues es el objetante mismo el llamado a probar los supuestos de hecho que consagran las normas en las cuales fundamenta su desacuerdo, y lo debe hacer al sustentar la objeción que eleva, con la que debe allegar las pruebas que respalden sus pedimentos, y no trasladarle esa carga al deudor, al acreedor objetado, y menos a la Judicatura, que por cierto tiene vedada la posibilidad de abrir un debate probatorio para resolver las objeciones dentro de estos trámites de negociación, más allá de lo que se haya arrimado al proceso dentro de las oportunidades procesales para hacerlo, razones por las que no es técnica ni legalmente procedente acceder al decreto y práctica de pruebas solicitadas.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR **NO PROBADAS** las objeciones presentadas ante el CENTRO DE CONCILIACIÓN en derecho “CONALBOS”, dentro del trámite de negociación de las deudas de PAOLA VANESSA SANMARTIN GALEANO, y que fueran formuladas por las apoderadas de los acreedores BANCO DE BOGOTÁ Y BANCO POPULAR, respectivamente, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al CENTRO DE CONCILIACIÓN “CONALBOSOS”, conciliadora en insolvencia ANDREA SANCHEZ MONCADA, para que levante la suspensión de la audiencia de negociación de deudas llevada a cabo bajo el radicado 0-407-23 y continúe con el trámite de la liquidación de persona natural no comerciante.

NOTIFÍQUESE,

ⁱ Corte Suprema de Justicia, SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA. M.P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. Número de Proceso T 1100102030002018-03791-00, Bogotá, 02 de abril de 2019

Firmado Por:
Gustavo Adolfo Ramirez Serna
Juez
Juzgado Municipal
Civil 001 Oral
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **17e3cbf315d8b72efa5fed104e55050a4f37e0d17476628c8b7df23845198983**
Documento generado en 02/04/2024 02:19:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>